

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

20ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION ORDINARIA

JULIO 19 Y 20 DE 1995

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero, Carlos Ernesto Seria
y Francisco de Durañona y Vedía

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACENOLAZA, Florencia
ACHEM, Antonio
ALBAMONTE, Alberto
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALCABA, Ernesto Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANGELO, José María
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGÜELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALTER, Carlos Mario
BARBOTTI, Alfio Ector
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERZONGARAY, Antonio Tomás
BERMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Angel
BONOMI, Silvia Mónica
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREUER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Obdulio
BULLERICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABERÓN, Juan Carlos
CALLEADA, Aníbal
CAMANO, Eduardo Oscar

CÁMERA, Mario Angel
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABBRO, Lilián
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURASONA y VEDIA, Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FALLETTI, Julio César José
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
FERNÁNDEZ MEJIDE, Graciela
FLORES, Rafael Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Dólor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GICJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GÓMEZ CENTURION, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Emman
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan M.
GRANADOS, Eulce

GREEN, Gustavo Adolfo
GUZMAN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUNADA, Raúl
IBARRÍA, José María
IBARRICHE, Julio César
ITURRE, César Eusebio
JAUNAFENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAMMERATH, Germán Luis
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Ragnel
LAFALLA, Arturo Pedro
L'HOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
MACEDO, Horacio Antonio
MACRADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREGOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARDINO, Emilio E.
MATEJOV, Enrique José
MATEJON, Jorge Eusebio
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, María
MENNEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelyn
MERCADO LUNA, Ricardo Cristián
MICHELLI, Marco Aurelio
MIGUELLO, Julio Alberto
MORALES de ROMERO, Norma
MOLINO, Elvio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco

MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MÜLLER, Mabel Hilda
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
NACUL, Miguel Camiel
NATALE, Alberto Adolfo
NEDER, Jorge Humberto
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario
NOVAU, Pedro José
OLIVERA, Enrique José
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARAJÓN, José María
PAROLA, José María
PASCUAL, Rafael Manuel
PATTERSON, Ricardo Ansell
PELLÁEZ, Víctor
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PÉREZ, Jorge Telmo
PERRINI, Gioconda Eulalia
PESCE, Félix
PICHETTO, Miguel Ángel
PIERRI, Alberto Reinaldo
POLINO, Héctor Teodoro
POLO, Luis Nicolás
PRAT, Alfredo Ernesto
RÉ, Ricardo Horacio
RICO, Aldo
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRÍGUEZ, Jesús
RODRÍGUEZ, Mabel E.
ROGGERO, Humberto Jesús
ROIG, Ángel
ROJO, Rubén Darío
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
RUIZ PALACIOS, José David
SALINO, María Antonia
SANPIETRO, Darci
SANTÍN, Eduardo
SARQUIZ, José Alberto
SCELZI, Carlos José
SCHIARETTI, Juan

SMITH, Santos
SOBRINO, Margarita María
SOLANAS, Fernando E.
SORIA, Carlos Ernesto
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Federico
SUCARIA, Neyef
SUIRO, Carlos Adolfo
TENEV, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TERRAGNO, Rodolfo Héctor
TOGNI de VELY, Adriana
TOLOMEO, Leonor
TOMA, Miguel Ángel
TOPA, Raúl Roque
TOTO, Francisco Patricio
TRETTEL MEYER, Raúl
VALCARCEL, Juan Manuel
VARELA CID, Eduardo
VÁZQUEZ, Roberto
VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
VENESIA, Gualberto Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE, Atilio Oscar
VITAR, José Alberto
ZAVALÍA, José Luis
ZICARELLI, Orlando A.
ZUCCARDI, María Cristina

BARBERÁ, Eliseo
BECERRA, Nicolás Eduardo
BORDA, Osvaldo
CARCA, Elisa Beatriz
CASTRO, Carlos José
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
KAHLER, Ernesto Rolando
MENEGHINI, Javier Reynaldo
MORELLO, Emilio Pedro
MUNOZ, Marcelo Bernardo
NINO, Jorge
ORGÁZ, Carlos Alfredo
ORQUÍN, Leopoldo Manuel
PARADA, Alberto
PERALTA, Aníbal Pedro
PERNASSETTI, Horacio F.
PINTO, Guillermo
SAADI, Ramón Eduardo
SEBASTIANI, Claudio A.
USANDIZAGA, Horacio Daniel

AUSENTES, CON AVISO:

ABASTO, Ángel Leónidas
ALENDE, Oscar Eduardo
ARMENDÁRIZ, Alejandro
CAMPERO, Rodolfo Martín
CEBALLOS, Walter Alberto
CERDERA, Rogelio Rafael
FIGUEROA, Pedro Octavio
GOLPE, Néstor Lino
GUERRERO, Luis Serafín
KOTH, Carlos
LÓPEZ, José Augusto
LYNCH, Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique Raúl
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MICHTTE, Salomón Antonio
MURIEL, Néstor Jorge
PICCININI, Ana Ida
RODRÍGUEZ, José
RODRÍGUEZ SANUDO, Hugo B.
RUBINI, Mirta Elsa
TROYANO, Silvia Elena
VARELA, Néstor Ángel

AUSENTES, CON LICENCIA:

FAYAD, Víctor Manuel
SÁNCHEZ GALDEANO, Roque

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA

ABIHAGGLE, Carlos Enrique
ADAME, Felipe Teófilo
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Miguel Alberto

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª sesión ordinaria (anexo 4ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1956.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre instancia obligatoria de conciliación laboral (84-P.E.-94). Se aprueba en general. (Pág. 1957.)
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Natale de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del que es coautor por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la fauna mensual de ganado bovino y porcino en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (2.959-D.-95). Es rechazada. (Pág. 1957.)
3. Moción del señor diputado Natale de reconsideración del asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1958.)

4. Reconsideración del asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1959.)
5. Moción del señor diputado Natale de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. (Se aprueba.) (Pág. 1959.)
6. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. (Pág. 1959.)
7. Moción de orden formulada por el señor diputado Rodríguez (Jesús) de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del que es coautor por el que se solicitan informes verbales al señor jefe de Gabinete de Ministros y a los señores ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social sobre el problema del incremento del desempleo (2.984-D.-95). Es rechazada. (Pág. 1964.)
8. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de

las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del asunto al que se refiere el número 18 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1938.)

9. Moción del señor diputado Matzkin de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 18 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1938.)
10. Autorización al señor diputado Molinas para ausentarse del recinto de la Honorable Cámara. (Página 1970.)
11. Manifestaciones del señor diputado Vichi sobre el asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. (Pág. 1970.)
12. Manifestaciones del señor diputado Albanonte sobre el asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. (Pág. 1970.)
13. Manifestaciones del señor diputado Alvarez Echagüe sobre el asunto al que se refiere el número 5 de este sumario. (Pág. 1970.)
14. Continúa la consideración del asunto a que se refieren los números 1 y 6 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 1971.)
15. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Justicia, de Legislación General y de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley en revisión sobre concursos y quiebras (1-S-95). Se aprueba en general el dictamen de mayoría. (Página 1980.)
16. Manifestaciones relacionadas con la labor de la Honorable Cámara. (Pág. 2103.)
17. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzkin de que se aplazce la consideración del asunto al que se refiere el número 15 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 2103.)
18. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Matzkin y otros por el que se solicitan informes verbales a los señores ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social sobre las políticas de empleo. (2-986-D-95). Se sanciona. (Pág. 2109.)
19. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 15 de este sumario. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 2109.)
20. Apéndice:
 - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 2110.)
 - B. Asuntos entrados:
 - Proyectos de resolución. (Pág. 2116.)
 - C. Inserciones solicitadas por los señores diputados:
 1. López (A. H.). (Pág. 2116.)
 2. Di Tulio. (Pág. 2121.)
 3. Dumón. (Pág. 2123.)
 4. Guzmán. (Pág. 2160.)
 5. Gómez Centurión. (Pág. 2162.)

—En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de julio de 1995, a la hora 16 y 6:

I

INSTANCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACION
LABORAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Justicia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre instancia obligatoria de conciliación laboral (expediente 84-P.E.-94)¹.

La Presidencia informa a los señores diputados que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con los presidentes de las distintas bancadas, existe la firme disposición de que mañana continuemos debatiendo los temas sujetos a consideración del cuerpo.

Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar en general el dictamen.

—Resulta afirmativa.

2

MOCIÓN DE ORDEN

Sr. Natale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: conforme con lo determinado por el inciso 10 del artículo 108 del reglamento, solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias a fin de peticionar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente 2.959-D-95, del que soy autor junto con el señor diputado Antelo, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo con respecto a la recaudación impositiva en materia de fauna de ganado.

Ha tomado estado público una cuestión muy grave. Existe una defraudación impositiva, que algunos calculan en alrededor de 500 millones de pesos, proveniente de la fauna de carne bovina y ovina en nuestro país.

El señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, se ha referido a la mafia de los faenadores. El ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, reconoció que en su jurisdicción más del 60 por ciento de la fauna se realiza clandestinamente.

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 12 de julio de 1995, página 1984.

En mi provincia, Santa Fe, se faenan mensualmente 250 mil cabezas de ganado y en la de Buenos Aires, alrededor de 600 mil. Sin embargo, lo que no se ha dicho y denunció en este recibo es que la mafia —como la calificó Felipe Solá— lleva a una evasión fiscal que no es pareja en toda la República Argentina.

En Santa Fe existen cincuenta y dos frigoríficos instalados que son controlados por el SENASA y que cumplen con sus obligaciones ante la DGI. El gran fraude fiscal lo producen los frigoríficos de la provincia de Buenos Aires, y el ministro de la Producción de la provincia reconoció públicamente ayer en el diario "Clarín" que más del 50 por ciento de los frigoríficos que faenan ganado utilizan artilugios judiciales para no pagar el IVA. Además de la faca clandestina existe una subfacturación y un engaño al declarar que se faena determinada clase de ganado.

Existe una serie de mecanismos que le cuestan al Estado más de 500 millones de dólares. Todo esto se produce y se concentra en la provincia de Buenos Aires con la tolerancia y la aquiescencia de las autoridades provinciales; mientras los frigoríficos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos cumplen con sus obligaciones fiscales y no existen denuncias graves. Insisto: existe tolerancia y aquiescencia de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Por eso solicito, en defensa de la industria frigorífica santafesina y de la industria frigorífica de todo el país, que los diputados por Santa Fe, sin distingos de ninguna naturaleza, nos acompañen con este pedido de informes. Es nuestra intención que se sepa que en una provincia en la que se faenan 250 mil animales por mes se paga más IVA que en otra donde se faenan 600 mil.

No sólo le pido a los señores diputados por Córdoba y Entre Ríos que nos acompañen con este proyecto, sino a los demás, solicitando especialmente a los señores diputados por la provincia de Buenos Aires que se hagan cargo de esta situación y que no acepten todas estas irregularidades que han llevado a decir al señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, doctor Felipe Solá, que existe una mafia que estafa al país; esto preocupa a la DGI y al SENASA, porque parecería que no se puede ingresar en un territorio en el que permanentemente se violan las leyes nacionales sobre la materia.

Por lo expuesto, formulo moción de orden de que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para tratar sobre tablas el proyecto enunciado.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Santa Fe. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

3

MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Matzkin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: quería solicitar al señor diputado por Santa Fe que pida la reconsideración del asunto que acaba de ser rechazado por la Honorable Cámara. En principio, el bloque Justicialista está dispuesto a votar favorablemente un pedido de informes.

No obstante ello, había pedido la palabra para aclarar el sentido del voto y no para hacer un discurso sobre la cuestión ni para meterme en el tema de fondo. Deseo expresar que en esta sesión, el bloque Justicialista, en las cuestiones en que haya acuerdo previo con el resto de los bloques, va a votar afirmativamente las mociones de orden, de apartamiento del reglamento o de cualquier otro tipo, pero con la salvedad de que el tratamiento en el plan de labor sea a posteriori de la sanción de los dos proyectos de ley que tenemos que considerar: la de instancia obligatoria de conciliación laboral, que acabamos de votar en general, y la ley de concursos y quiebras.

Reitero que, después de sancionar esas leyes, se incluirían en el plan de labor todos los temas que hayan sido acordados previamente y que determinen un apartamiento del reglamento.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene al palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: teniendo en cuenta las expresiones del señor diputado Matzkin, solicito la reconsideración de la moción que acaba de votar el cuerpo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración formulada por el señor diputado Natale. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

4

MOCION DE ORDEN

(Reconsideración)

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar nuevamente la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Natale.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: daré lectura del texto del pedido de informes.

El proyecto de resolución dice así:

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, informe:

1º — Cuánta es la faena mensual de ganado bovino y porcino que se efectúa en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, desagregándola por provincia.

2º — Cuál es la recaudación mensual de impuesto al valor agregado, proveniente de la faena de ganado, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, discriminando por provincia.

3º — Cuál es el comportamiento de las autoridades provinciales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con respecto a los organismos del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

4º — Qué medidas implementará el gobierno nacional para evitar la evasión fiscal que se produce en la provincia de Buenos Aires y que además de afectar a la Tesorería de la Nación está creando una ruinoso competencia desleal con la industria frigorífica de la provincia de Santa Fe.

Alberto A. Natale. — José M. Antelo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Natale. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

5

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del que acabo de dar lectura.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Natale.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: estamos de acuerdo y quiero indicar el voto favorable de la bancada justicialista a condición de que la incorporación del tema en el plan de labor sea con posterioridad a la finalización del tratamiento de los dos proyectos de ley que debemos considerar, el de conciliación obligatoria laboral y el de concursos y quiebras.

Sr. Presidente (Pierri). — Así debe hacerse, señor diputado.

Se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor diputado Natale. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda incorporado el asunto en el orden del día de la presente sesión a continuación del dictamen sobre concursos y quiebras.

6

**INSTANCIA OBLIGATORIA
DE CONCILIACION LABORAL**

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde considerar en particular el proyecto de ley aprobado en general sobre instancia obligatoria de conciliación laboral (expediente 84-P.E.-94).

En consideración el título I, que comprende los artículos 1º a 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la comisión propone sustituir los artículos 2º y 3º por los siguientes. "Artículo 2º: Quedan exceptuados del carácter obligatorio y previo de esta instancia:

"1. La interposición de acciones de amparo y medidas cautelares.

"2. Las diligencias preliminares y prueba anticipada.

"3. Cuando el reclamo individual o plurindividual haya sido objeto de las acciones pre-

vistas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis, o de conciliación obligatoria previstos en las leyes 24.013 y 14.786.

"4. Las demandas contra empleadores concursados o quebrados.

"5. Las demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal.

"6. Las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público.

"Artículo 3º: El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: aunque ya lo mencionamos durante el debate en general, creo que vale la pena insistir en que el establecimiento de la conciliación obligatoria agregará a los ya dilatados juicios laborales una etapa previa administrativa que, por ser obligatoria, va a acarrear al trabajador un mayor perjuicio y una mayor dilación en la búsqueda de satisfacción frente al incumplimiento del empleador.

También debemos considerar que el trabajador que demanda el salario, las horas extras u otros beneficios que se le deben, más que un hombre defendiendo sus derechos, es una persona que reclama una prestación alimentaria, lo que es una característica en este tipo de juicios; por lo tanto, se presenta sumamente disminuido frente al patrón. Así, es muy probable que empleadores inescrupulosos, en connivencia con conciliadores que también lo sean, arbitren medidas que perjudiquen al trabajador.

En consecuencia, el carácter obligatorio de este tipo de instancia va a llevar, por un lado, a una mayor dilación de las causas y, por el otro, a abrir las puertas de un proceso de corrupción judicial que tanto preocupa al señor ministro de Economía, como lo manifiesta en sus discursos. Pareciera que como los perjudicados serán los trabajadores, al ministro no le inquieta este tema; pero la realidad es que aquella instancia —repito— abrirá las puertas a un proceso de corrupción en perjuicio del trabajador, lo cual es bastante evidente.

Quiero traer otro dato que es interesante. Se ha instalado en el escenario político y social de la República Argentina un debate sobre un problema que también inquieta al gobierno: la desocupación. Nos encontramos con que la instancia que se propone generará mayor desprotección y precariedad en la situación de los trabajadores; esa instancia no actuará como un

elemento de contención de los despidos sino que en todo caso los alentará.

Analicemos el caso de un empleador que duda de despedir a uno o varios trabajadores en virtud del monto de las indemnizaciones que va a tener que pagar. Aprovechando las ventajas que brinda este tipo de conciliación obligatoria a quien no depende de su salario para alimentarse, y la posibilidad de que del sorteo surja un conciliador con quien sea factible arreglar para que persuada al trabajador a efectos de que éste reclame mucho menos de lo que le corresponde, el empresario inescrupuloso —que los hay— tendrá mayores facilidades para despedir al empleado.

Por lo expuesto, mucho ayudaría a esta ley que se le suprimiera el carácter obligatorio que contiene su artículo 1º. En este sentido, propongo que quede redactado de la siguiente manera: "Los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, podrán ser dirimidos con carácter previo a la demanda judicial...". De esta manera habrá mayor seguridad para los trabajadores y menos posibilidades de despidos dentro de una situación en la que el tema de la desocupación inquieta a todos por igual.

No sé si la comisión ha atendido el reclamo que acabo de formular; el murmullo me indica que no lo ha hecho. De todas formas, es importante someterlo a su consideración.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega a los señores diputados que guarden silencio.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: no sé si el artículo 3º será suprimido pues no he podido seguir el planteo del señor diputado Suñero como hubiese querido. De cualquier manera, el hecho de que los acuerdos alcanzados en la instancia de conciliación estén exentos de impuestos y de aportes con destino al régimen de la seguridad social, implica sustraer a éste de una serie de fondos cuya evasión no encuentra razón alguna. Estamos hablando de aquellos reclamos sobre los que se deberían hacer los aportes. No hay razón para que aquellos salarios que no se pagaron pero que se abonan en la instancia judicial estén exentos de los aportes y contribuciones correspondientes. El hecho de que las sumas respecto de las cuales normalmente se efectúan aportes y contribuciones sean abonadas en la instancia de conciliación, no impli-

ca que no deban hacerse dichos aportes. En consecuencia, sugiero a la comisión que suprima el artículo 3º, con lo cual deberá procederse al pago de las contribuciones y de los aportes.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: estamos al inicio del tratamiento en particular. La iniciativa define en la primera parte en qué consiste este procedimiento especial de conciliación. Por ello manifiesto la posición del bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de que lo vamos a votar por la negativa, como hicimos durante el tratamiento en general, sin entrar a abundar en mayores consideraciones, ya que anteriormente hicimos nuestras apreciaciones.

Quiero recalcar que no podemos desmenuzar el articulado tal como ha sido presentado, aunque define perfectamente un cambio sustancial en el procedimiento que hoy se sigue en el ámbito de la Justicia. La cuestión radica en que se excluye al trabajador de los tribunales mediante una actitud que ya es muy común y que estamos observando a menudo en este gobierno. Lo ha hecho desde que comenzó este proceso de cambios que consiste en llevar todo al terreno del ámbito privado.

Esta iniciativa va a lograr la privatización del derecho laboral argentino. El trabajador, prácticamente, tendrá vedado el ingreso a la Justicia, porque existirá una instancia que lo trabará y lo demorará. Incluso, ello terminará desalentando al trabajador, quien seguramente arreglará en cualquier estudio jurídico en función de la mejor oferta que se le presente.

Esta norma —lo hemos dicho en la sesión anterior— es violatoria de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica, ya que impide el tratamiento de los problemas del trabajador ante la Justicia, que es el lugar que corresponde y que le ofrece la imparcialidad necesaria.

Además, observamos una vez más otro hecho que deteriora el ya tan destruido derecho protectorio de los trabajadores. Aquí se viola un principio importantísimo, que surge del estado de desigualdad y de desequilibrio con que el trabajador debe tratar con la otra parte. Por ello ha nacido el derecho protectorio del trabajador, a fin de lograr salvar ese desequilibrio, que siempre tiene como víctima a quien presta el trabajo. Este proyecto destruye ese derecho protectorio y no mejora la situación del trabajador. Lo hemos dicho en varias oportunidades y lo reiteramos ahora, porque es necesario re-

petirlo hasta el cansancio, más aún cuando en el país se está debatiendo el alto índice de desocupación existente.

Esta iniciativa no soluciona el conflicto de la desocupación. Como expresó el señor diputado Flores, abre la puerta hacia una mayor desocupación, porque facilita los mecanismos para que el empleador expulse al trabajador de su empresa. Es necesario que se exprese y se reconozca esta verdad.

Este proyecto está inscripto dentro de un compromiso que el gobierno contrajo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo expresa un artículo del diario "Clarín" del 16 de julio de 1991, página 16, donde quedaba perfectamente claro que entre las condiciones que este gobierno había aceptado frente al Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda externa se encontraba la flexibilización de las relaciones laborales, la pérdida del derecho de los trabajadores y la eliminación de las rigideces laborales. Además, entre tantos otros compromisos, figuraba la privatización —que ya se cumplió— de todos los servicios públicos brindados por las empresas del Estado y del sistema jubilatorio.

Lo que hemos mencionado fueron entregas que este gobierno hizo ante los organismos financieros internacionales, sosteniendo una actitud de clara claudicación. Muchas de las leyes que se han sancionado, así como otras que están en tratamiento —por ejemplo, el proyecto de ley de quiebras—, constituyen prácticamente una entrega que afecta a la dignidad de los trabajadores argentinos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J.L.). — Señor presidente: para que sea ágil el tratamiento en particular, solicito a los señores diputados que no vuelvan a repetir los discursos pronunciados durante la discusión en general. De lo contrario, tendremos para un largo rato. Todos ya han expresado sus argumentos, e incluso ya se fijó una posición con la votación en general. Lo que ahora hay que hacer es fundamentar las modificaciones que se pretenden.

La comisión no acepta la propuesta formulada por el señor diputado Flores en el sentido de suprimir la obligatoriedad de la aplicación de la conciliación, porque se estaría atentando contra toda la estructura en la que se basa esta norma.

En cuanto al artículo 3º, la comisión propuso finalmente la siguiente redacción: "El procedimiento será gratuito para el trabajador y sus derechohabientes." El resto ha sido suprimido.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título I que incluye los artículos 1º a 3º, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título II, que incluye los artículos 4º a 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la comisión propone que el artículo 6º quede redactado de la siguiente forma: "Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado con antecedentes en materia de derecho del trabajo. Asimismo, podrán requerirse condiciones especiales de antigüedad en la matrícula y calificación diferenciada según el monto y complejidad del asunto."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: quisiera que la comisión me aclare qué se quiere decir con "calificación diferenciada" y con "según el monto y complejidad del asunto". Esto último, "monto y complejidad", tiene que ver con lo que la economía general del proyecto establece. Aquí no se diferencia una justicia específica para los pleitos de escaso monto o simpleza, y otra para los de montos importantes o complejidad. Por eso quiero saber a qué se apunta con esa expresión, habida cuenta de lo que establece el artículo 8º, que simplemente fija un sorteo para la distribución de la tarea, sin discriminar conciliadores de primera o segunda clase. En consecuencia, antes de proponer una modificación solicito a la comisión que trate de aclarar esto.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: habida cuenta de la observación formulada por el señor diputado Garay, vamos a suprimir la segunda oración, es decir, desde la palabra "asimismo" hasta el final, con lo cual el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado con antecedentes en materia del derecho del trabajo."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: estoy de acuerdo, no obstante haber expresado mi voto negativo al proyecto de ley en general. Esto sin duda mejora el procedimiento que aquí se establece y se hace compatible con el sorteo mencionado en el artículo 8º y con el resto del articulado, que no establece la discriminación por mon-

to o complejidad del asunto. En consecuencia, no tengo otra observación que formular a este artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: había pedido la palabra antes de la votación en general porque quería solicitar que la votación fuera nominal y para que todos los compañeros diputados nacionales tomaran conocimiento de un nuevo reclamo de una empresa pesquera de la provincia de Santa Cruz. Para no transgredir ahora el acuerdo al que se ha arribado solicito la inserción en el Diario de Sesiones del reclamo que hacen los compañeros de la empresa Barilari al diputado nacional Héctor Di Tulio para que plantee el problema en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título II, que comprende los artículos 4º a 6º, con la modificación efectuada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración título III, que contiene el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: si bien este artículo reviste menos gravedad que otros que verdaderamente constituyen un atropello a los derechos adquiridos de los trabajadores, es una muestra más de la desprotección que se instaura, ya que la ley de contrato de trabajo establece en el artículo 257 que el reclamo en sede administrativa suspende el curso de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Código Civil. Es decir que tenemos en beneficio del trabajador un período de seis meses de suspensión de la prescripción desde el mismo momento en que inicia un reclamo por vía administrativa.

El plazo establecido en la ley para la conciliación es mucho menor, y el artículo 7º dice en su último párrafo que "esta presentación suspenderá el curso de la prescripción hasta la finalización del procedimiento de conciliación." O sea que si, una vez finalizado el procedimiento, el trabajador no llegase a iniciar inmediatamente las acciones judiciales, puede llegar a perder sus derechos en determinados casos, alcanzado por la operatividad de la cláusula prescriptiva. Por lo tanto, sugiero a la comisión que el último párrafo del artículo 7º quede redactado del siguiente modo: "Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción por el término que establece el artículo 257 de la ley de contrato de trabajo." De esa manera se mantiene el plazo

de seis meses que beneficia al empleado y no se instituye esta norma que evidentemente lo perjudica.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: a pesar de que en la votación en general nos expedimos por la negativa, deseamos proponer una modificación al artículo 7º, que en su primera parte dice así: "El reclamante por sí, o a través de apoderado o representante sindical, formalizará el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria...".

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Polino. — Más adelante, en los artículos 17 y 19 tampoco se prevé la asistencia del trabajador por parte de un abogado, y a nuestro juicio es necesaria la presencia de un profesional en esas audiencias de conciliación, presencia que no puede ser sustituida por un representante gremial o patronal. En consecuencia, solicitamos a la comisión que analice la posibilidad de establecer la asistencia de un letrado en las audiencias de conciliación por parte de los trabajadores.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: aunque en general hemos votado por la negativa, durante el debate en particular formularemos algunas observaciones y solicitaremos ciertas modificaciones que según nuestro criterio colaboran con la buena redacción de este proyecto.

Solicitamos a la comisión que modifique el título III, de modo que en vez de denominarse "Demanda de conciliación" se llame "Procedimiento de conciliación", porque eso es en definitiva sobre lo que se está legislando: un mero reclamo que se va a someter a un procedimiento especial. La modificación es importante porque de otro modo se distorsiona el sentido de la disposición.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana. — Señor presidente: sin perjuicio de haber votado en general en contra de este proyecto de ley, deseo efectuar algunos aportes para mejorar su articulado.

En cuanto al artículo 7º, no sólo comparto lo expresado acerca de la necesidad de que el trabajador sea asistido por un abogado, sino que hago notar que tal como está redactada la norma

se podría suponer, al disponerse que el trabajador formalizará el reclamo consignando su petición en el formulario, que ésta será la forma obligatoria de realizar tal reclamo. Creo que el texto no puede obligar a que se utilice única y exclusivamente el formulario, por lo que en todo caso la norma debería expresar que el solicitante "podrá" formalizar el reclamo en el formulario que apruebe el ministerio respectivo.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la comisión acepta la sugerencia formulada por el señor diputado Flores en relación con el artículo 7º.

Asimismo, en cuanto al planteo del señor diputado Polino, pensamos que tal como está redactado el artículo es suficiente garantía a los fines de la presentación, porque sobre el particular la ley de procedimiento laboral vigente determina en su artículo 35 lo siguiente: "Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional habilitada legalmente para hacerlo...".

Si a los efectos de la representación en juicio la ley permite que el trabajador sea representado por la asociación sindical, no entendemos por qué razón esta misma autorización no la podríamos conceder en la etapa de la conciliación obligatoria. Por ello en este aspecto la comisión mantiene la redacción del artículo tal como figura en el proyecto aprobado en general.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: quisiera que la comisión indicara qué ha resuelto con relación a la sugerencia que formulé en cuanto a la denominación del título III.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: las aclaraciones que he expresado indican la posición de la comisión. Es decir, sólo se acepta la propuesta del señor diputado Flores. También dimos una respuesta al señor diputado Polino, o sea que la postura es negativa con relación a las restantes sugerencias.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el título III, que contiene el artículo 7º, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa.

14

**INSTANCIA OBLIGATORIA
DE CONCILIACION LABORAL**

(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri).— Continúa la consideración en particular del dictamen sobre instancia obligatoria de conciliación laboral.

En consideración el título IV, que comprende los artículos 8º a 11.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Propongo una modificación al artículo 8º, que quedaría redactado de la siguiente manera: "El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria designará por sorteo público de entre los inscritos en el Registro Nacional, un conciliador que entenderá en el reclamo interpuesto". Es decir, se incorpora la palabra "público", y es la única modificación que apoyamos.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores.— Señor presidente: como consecuencia de este hecho de la desocupación que para algunos parece que tiene poca importancia, veo venir un aluvión de anotados en el denominado Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y, con honestidad, debo decir que no me imagino haciendo cola para inscribirse a los abogados especializados en el tema, y sin hacer mayor esfuerzo mental preveo que quienes se van a anotar serán los menos capaces.

Más allá de los murmullos que se escuchan, creo que esto abre las puertas a un sistema muy peligroso, porque los conciliadores —como se ha dicho durante el desarrollo de este debate— son personas que serán retribuidas por los empleadores y van a tener que resolver ni más ni menos que sobre demandas de carácter alimentario que formulen los trabajadores.

Por otro lado, creo que la modificación propuesta por el representante de la comisión —sin querer ironizar sobre el particular— no es sustantiva, porque el carácter público del sorteo no garantizará absolutamente nada; el sorteo se efectuará y en los hechos nadie se enterará de cómo se realizó.

Por ello entiendo que este es un buen momento para propiciar un cambio en la redacción de este artículo para darle algo más de seriedad y ofrecer garantías a quienes deberán ser los destinatarios principales de toda legislación del trabajo.

Sugiero darle carácter permanente a este Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para eliminar la posibilidad de que cualquier profesional, sin importar si tiene antecedentes o no, si se recibió hace una semana o más tiempo, o si posee algún tipo de conocimiento sobre el tema, pueda integrar la nómina de quienes tendrán que conciliar a las partes en materia de conflictos laborales. Creo que, si se crease un cuerpo permanente, al menos estaría asegurada la especialización de sus integrantes y sería mayor la transparencia del procedimiento, al igual que las garantías para el trabajador, por más que esto parezca un tema de menor importancia que la desocupación.

De allí que me permito sugerir a la comisión que la redacción del artículo 8º determine lo siguiente: "Se establece que los miembros del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria revisarán en forma permanente y recibirán la remuneración que establezca la reglamentación".

Si esos miembros son de carácter permanente, la segunda parte del artículo 8º perfectamente podría incluir la figura del sorteo para designar quién tiene que ser el conciliador que participe en un conflicto determinado, porque hay menos elementos alcatorios y menos riesgos para garantizar la mejor seriedad posible en el tratamiento de este tema.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau.— Señor presidente: teniendo en cuenta lo que dije en el debate en general —que ha sido un poco corroborado por lo que manifestó el señor diputado Flores— puedo expresar que tengo conocimiento de que existen colas de abogados frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lamentablemente, se trata de profesionales que jamás han tenido cabida en el derecho laboral en un nivel de consideración y respeto. Están buscando un "conchabo" en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social frente a la perspectiva de este nuevo negocio que se ha abierto.

No vemos que la redacción del artículo 8º otorgue seguridad en el manejo del sorteo, porque se puede dar lugar a que un dedo desde arriba privilegie a los amigos. Por ello, voy a proponer a la comisión que considere una ampliación de este artículo, que dejaría definido un procedimiento que otorgue garantía en lo referente al sorteo, sin que exista fraude. La redacción sería la siguiente: "El Servicio de Conciliación Obligatoria, designará anualmente por sorteo el orden en que los inscriptos en el Registro Nacional entenderán en los reclamos in-

terpuestos, los que se distribuirán estrictamente de conformidad con los números correlativos que se asignen a las reclamaciones a las que alude el artículo 7º.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: desisto de hacer uso de la palabra en esta oportunidad, solicitando que se me anote para hablar en relación con el próximo título.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: no se puede estar considerando este artículo sobre la base de suposiciones. Hasta ahora, lo que he escuchado como argumentación es que, tal como está redactado, se puede producir el hecho de que los conciliadores no sirvan, se vendan o que estén "tocados" por los empleadores.

Quienes buscamos que la futura norma sea aplicable en la práctica pensamos en profesionales probos, en abogados con fundamento en el derecho laboral, y no vamos a dar "conchabos" a delincuentes que vengán a perjudicar a alguien en particular.

Además, el trabajador no va a ir solo a reclamar y esta instancia no lo inhabilita para reclamos posteriores, o sea que, vencido el plazo correspondiente, podrá ir a la Justicia a formular su pedido.

Por lo expuesto no aceptamos la propuesta formulada.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título IV, que comprende los artículos 8º a 11.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título V, que comprende los artículos 12 y 13.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: vamos a proponer una nueva redacción del artículo 13, con el siguiente texto: "En los supuestos previstos en el artículo anterior, el empleador depositará los honorarios del conciliador, a su orden, en el Fondo de Financiamiento previsto en el artículo 14 de la presente ley, dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la homologación del acuerdo, o en su caso, dentro de los tres (3) días corridos de consentimiento o ejecutoriado el laudo.

"En caso de incumplimiento del empleador, el Fondo extenderá la certificación correspondiente.

"El Fondo de Financiamiento del presente régimen tomará a su cargo el pago al conciliador del honorario básico a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 cuando el trámite culminare sin acuerdo conciliatorio ni designación de conciliador como árbitro. La eventual condena en costas pronunciada en sede judicial impondrá al empleador el reintegro al Fondo, del honorario básico abonado al conciliador. En el caso de condena del empleador, la respectiva sentencia podrá imponer un recargo de ese honorario dentro de los márgenes que fije la reglamentación cuando merituaré en aquél un comportamiento abusivo que condujo a la frustración del trámite conciliatorio previsto en esta ley."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: en realidad no voy a hacer uso de la palabra sobre este título porque las observaciones vinculadas a la corruptela que considero que se establecerá con el pago de honorarios fueron planteadas en la consideración en general. Como veo que la comisión tiene la intención de seguir adelante con su criterio, no tiene sentido insistir.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: el artículo 12 establece que el conciliador percibirá un honorario básico determinado por el Ministerio de Justicia, el cual se incrementará cuando el trámite culmine en una conciliación homologada, en una proporción que la ley deja librada a la reglamentación. Sin embargo, el artículo 17 menciona que el letrado interviniente está facultado a firmar un pacto de cuota litis que no exceda del 10 por ciento de la suma conciliada.

Ahora bien, el aumento del honorario básico del conciliador quedará a cargo del empleador y, por lo tanto, el primero tendrá un interés particular en conciliar rápidamente el litigio con una posible inclinación en favor de quien abonará la retribución, que es el empleador.

Propongo a la comisión que el segundo párrafo del artículo 12 no contenga la expresión "se incrementará", de modo tal que el conciliador perciba el honorario que se fije oportunamente en la reglamentación, pero sin que exista ese estímulo porque, como la suma va a ser abonada por una de las partes, termina por ceder la que es más débil en la relación laboral y finalmente serán los trabajadores los que se verán perjudicados.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: el artículo 12, que como decía el señor diputado Polino delega en el Ministerio de Justicia la determinación del honorario del conciliador, se aparta de la regla de que cualquier honorario profesional que no ha sido acordado por las partes debe estar regulado por una ley de aranceles.

Por otra parte el artículo 17 —que también mencionaba el señor diputado Polino— establece la obligatoriedad de ser asistido por un letrado o —en el caso de los trabajadores— por la asociación sindical de la actividad con personería jurídica. Debido a esta obligatoriedad, siempre habrá un profesional del derecho que estará trabajando por la mediación. No obstante, solamente se prevé la posibilidad del acuerdo voluntario, es decir, un pacto de cuota libre. Pero, ¿qué sucede si las partes no celebran acuerdo sobre ese 10 por ciento o, lo que es más grave aún, si luego de haber acordado con sus letrados un pacto de cuota litis en el que se establece el monto de la conciliación, ésta no se produce? En este caso, los letrados no tendrán la posibilidad de percibir honorarios.

En primer lugar, los honorarios del conciliador no pueden ser fijados administrativamente, porque si en algún momento tuvieran que ser ejecutados por ante el poder jurisdiccional a través de una demanda, su valor sería relativo, y hasta pensaría que nulo. Ello, porque la obligación surge del acuerdo de las partes, de los hechos que están concebidos en la ley —como los accidentes— o de la ley misma. En segundo término, porque no puede establecerse una escala, que al menos debería contener cuatro etapas, con respecto a la fijación de honorarios: para el conciliador que no concilia, para el que sí lo hace, para el árbitro —que es el mismo conciliador— que interviene con posterioridad y le fue aprobado el laudo y para el árbitro al que le desecharon el laudo.

Me pregunto cómo se va a establecer esta escala compleja a nivel de una resolución administrativa. Para que el honorario del conciliador tenga posibilidad de ejecución debe ser regulado por una ley.

Por otra parte, existe una delegación de facultades del Congreso que es inadmisibles, pues es en este ámbito donde deben regularse los honorarios del conciliador.

Pido especialmente a la comisión que tenga en cuenta que hay una grave omisión en lo que se refiere a los honorarios de los letrados, tanto los del obrero o dependiente como los

del sector patronal. Aquéllos podrán ser sustituidos por las instituciones sindicales o empresarias, pero creo que lo más normal será que un abogado represente a las partes pues, como se ha expresado, es imposible que frente a cincuenta mil juicios laborales por año las entidades sindicales o empresarias dispongan de un número tan importante de abogados que representen a las partes. De todas formas, en el proyecto de ley no se establecen pautas para que esos abogados perciban honorarios por sus servicios, ya que sólo está fijada la posibilidad del pacto de cuota litis, que es un acuerdo de voluntades que subordina la percepción de una suma posterior.

Frente a la posibilidad de que se acuerde o no, existen dos cuestiones: si no hay acuerdo, debe estar fijado el honorario para que el letrado pueda percibirlo; si no hay conciliación, no habrá porcentaje posible para determinar el pago de los honorarios aunque sea por la vía del pacto de cuota litis. Llamo la atención a los señores diputados que integran la comisión a fin de que tomen el recaudo pertinente para que no permanezca esta laguna y, además, que no se deleguen —como se establece en el artículo 12— facultades que son propias de esta Cámara, de acuerdo con las atribuciones que nos confiere la Constitución para legislar sobre aranceles profesionales.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Suñero. — Señor presidente: a pesar de la opinión del señor diputado Garay, la comisión va a mantener la redacción de estos artículos pues entendemos que en el proyecto no existe ningún tipo de laguna. Creemos que él lo analiza desde una perspectiva estrictamente judicial —como si se tratara de un trámite judicial—, y ello es incorrecto. Se trata de un trámite de conciliación. Entonces, mantenemos la redacción que figura en el dictamen, con las modificaciones que propusimos al inicio del tratamiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a pasar lista.

—Se pasa lista, registrándose la presencia de 148 señores diputados.

—Al pase de lista, se encuentran presentes los señores diputados Alfaro, Alberdi, Alcalá, Alegre, Alegre, Alvarez (C. R.), Al-

varez Echagüe, Alvarez García, Antelo, Aranda, Argiuello, Arias, Arrecheta, Ayala, Ayetz, Balestrini (A. E.), Barriounevo, Baum, Benedetti, Benzi, Bernádez, Bianchi Silvestre, Bonino, Bonomi, Bracchi, Branda, Breser, Brunelli, Bullich, Cabirón, Callaba, Cámara, Camaño, Casari, Castillo (J. L.), Closs, Corchuelo Blasco, Crostelli, D'Alessandro, D'Elia, Daud, Del Fabro, Delepiane, Di Tulio, Digón, Donni, Drisaldi, Dumón, Durañona y Vedia, Durrieu, Fabrisin, Fernández Gill, Fernández Meijide, Fragoso, Funes, Calante, Galván, Garay, García Moreno, Gauna, Gazia, Gioja, Golpe (C. H.), Gómez Centurión, González, Granados, Green, Guzmán, Hardy, Hernández, Herrera, Herrera Arias, Humada, Iturre, Jaunarena, Juncosa, Lafalla, Lahoz, Lambert, Larraburu, Leguizamón, López (A. H.), López Arias, Macedo, Maidana, Manfredotti, Maqueda, Marcos, Martínez (E.), Martínez (M. L.), Martínez (S. V.), Martínez Carbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Meneñi, Mercader, Michelli, Migliozzi, Miralles de Romero, Molardo, Molinas, Müller, Muniagurúa, Nacul, Neder, Negri, Novau, Ortiz Maldonado, Parajón, Parola, Pellin, Pepe, Pérez, Perrini, Pescé, Pichetto, Pierri, Polino, Ré, Rico, Rodrigo, Rodríguez (M. E.), Reig, Rojo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruiz Pacheco, Salino, Sarquiz, Seelzi, Schiavetti, Soría, Storani, Sucaria, Sueiro, Tencv, Terragno, Tolomeo, Toma, Trettel Meyer, Vázquez (R.), Venesia, Vicchi, Viglione y Villar.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título V, que comprende los artículos 12 y 13.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título VI, que comprende los artículos 14 y 15.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: quisiera que la comisión explicara cómo se forma el fondo a que hace referencia el inciso b) del artículo 14, toda vez que allí se habla de los depósitos que realicen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué sucederá cuando dichos ministerios no efectúen esos depósitos?

Asimismo, quisiera saber cuáles son los gastos administrativos del representante a que hace referencia el primer párrafo del artículo 14.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: este artículo es similar al que el señor diputado votó con la ley de mediación; esto es casi una copia de

lo redactado en materia de fondos para sostener la mediación. Por lo tanto, mantenemos la redacción de este artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar al señor diputado que he votado en contra de la iniciativa anterior.

De todas maneras, no está de más que en este nuevo proyecto la comisión explique a qué se refieren estos dos artículos.

La norma anterior ya ha sido votada, pero sería importante que en este nuevo articulado se aclarara el alcance de los fondos aportados por los ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social y cuáles serán los otros gastos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la explicación es muy sencilla. Los fondos a que se refiere el inciso b) son justamente los necesarios para el honorario básico a los conciliadores.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título VI, que comprende los artículos 14 y 15.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título VII, que comprende los artículos 16 a 20.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: queremos hacer algunas aclaraciones a pesar de la postura adoptada de no acompañar esta iniciativa con nuestro voto.

Cuando hablamos de presunción sobre el comportamiento de los profesionales que sean parte del procedimiento o de presunciones sobre fallas que tendrán los procedimientos, nos referimos a lo que en realidad puede suceder, porque es nuestra obligación hacer provisiones para que no haya errores en la aplicación de la ley.

Aquí se ha dicho que no podemos hacer presunciones ni echar un manto de sospecha sobre los conciliadores, pero desde hace mucho tiempo estamos diciendo —lo venimos repitiendo hasta el cansancio— que todas estas normas sobre flexibilidad laboral provocan desocupación en lugar de resolver el problema, tal como se sostiene desde el oficialismo, especialmente en las esferas del gobierno.

Cuando comenzamos a discutir estas iniciativas el índice de desocupación se ubicaba alrededor del 7 por ciento, y ahora el propio

gobierno ha reconocido que llegó al 18,6 por ciento. Esto demuestra que en aquel momento no estábamos haciendo presunciones, sino que habíamos de una realidad que sin lugar a dudas se iba a producir y que íbamos a sufrir. De la misma forma, sostenemos que hoy tendríamos que estar hablando de hiperdesocupación, porque es el proceso que estamos viviendo.

En el artículo 17 se señala que las partes podrán ser asistidas por un letrado y se aclara que los trabajadores podrán ser asistidos por la asociación sindical que los agrupa, y los empleadores por las organizaciones que los representan. De esta manera se distorsiona el verdadero sentido de este artículo, porque quienes pueden prestar asistencia en instancias de esta naturaleza son los letrados. La asociación gremial puede acompañar al trabajador en este proceso para facilitarle los elementos que necesite, pero éste debe ser representado en esta instancia por un letrado.

Por ello es que sugiero que el artículo 17 quede redactado de la siguiente manera: "Las partes deberán ser asistidas por un letrado. Los letrados están facultados a celebrar con sus patrocinados un pacto de *cuenta litis* que no exceda el 10 por ciento de la suma conciliada".

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay.— Señor presidente: lo que señalé al tratarse el artículo 8º debo reiterarlo en relación con el 17. La propuesta del señor diputado preopinante mejora indudablemente la redacción, porque es evidente que la asistencia debe ser letrada. De lo contrario, tanto el empresario como el obrero o el dependiente podrían asistir por sí ante el conciliador.

Pero además de las modificaciones propuestas sugiero que se encuentre una solución a la laguna que mencioné anteriormente, es decir, a qué es lo que sucede si no existe acuerdo o pacto de *cuenta litis* entre el representante y el representado y cómo se fijan los honorarios de los letrados.

En consecuencia, sugiero que en la parte final, después de la expresión "suma conciliada" se agregue lo siguiente: "El conciliador o el árbitro en su caso fijarán los honorarios de los profesionales intervinientes regulando entre un 10 a un 20 por ciento de escala fijada para el proceso judicial".

Solicito a la comisión que tomé en cuenta esto porque de lo contrario va a tener allí una verdadera laguna, ya que ni el dependiente ni la patronal se podrán liberar de los honorarios,

pues si ahí no se regula es sabido que el profesional puede recurrir ante la Justicia para pedir la regulación en un juicio aparte. No creo que esto le haga bien al proceso ni a las partes.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

Sra. Maidana.— Señor presidente: pese a que he votado negativamente este proyecto y a que advierto que la comisión no es proclive a aceptar los aportes de los señores diputados —por de pronto en lo que a mí respecta—, voy a insistir, en orden a que en el artículo 16 se habla de que al conciliador se le debe dar vista del formulario a que hace referencia el artículo 7º, en que no debemos referirnos necesariamente a un formulario sino al reclamo que efectúe el trabajador. Sostengo esto porque estoy segura de que en muchas ocasiones esos formularios van a faltar en las oficinas respectivas, con lo cual el trabajador se verá privado de la posibilidad de realizar su reclamo. No tiene por qué tratarse de un requisito formal obligatorio, porque en todo caso el reclamo del trabajador lo puede hacer un abogado a través de un escrito que podrá reunir los recaudos de una demanda, pero no necesaria ni obligatoriamente debe exigirse un formulario.

En consecuencia en vez de que el artículo 16 diga que se deberá dar vista del formulario, tendría que establecer que se ha de dar vista al conciliador del reclamo que formule el trabajador, que —como dejo constancia— podrá hacerlo en un formulario o no.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia.— Señor presidente: hace unos instantes el señor diputado Polino preguntó muy acertadamente cuáles eran los recursos que figuran bajo el nombre de "depósitos que realicen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". Es evidente que esto se vincula con el artículo 19, que prevé el pago de una multa por incomparecencia injustificada que, como es obvio, debe pagarse a alguno de esos ministerios.

Esto no queda claro en el texto que estamos considerando. El Ministerio de Justicia tiene reservadas la administración del fondo de financiamiento y la del Registro de Mediadores, aunque también se ocupará de llevar estadísticas, según lo dispone el artículo 27. Por consiguiente, de modo similar que en el proyecto de ley aprobado previamente, considere que el encargado del fondo de financiamiento debería ser el que

reclamara el pago de las multas. En ese sentido, la multa deberá tener un sistema de pago que sea recibido por el Ministerio de Justicia, que es el que administra el fondo y el que hará los depósitos que correspondan a las multas que perciba.

Me parece que establecer que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá ser el que promueva la ejecución complica demasiado el mecanismo, pero no formularé una observación sobre este asunto porque no deseo perturbar con una modificación tan sensible el trabajo de la comisión. Pero sí deseo proponer que luego del primer párrafo del artículo 19 se agregue el siguiente texto: "La reglamentación establecerá el modo de pago de la multa fijada en esta disposición". Si se establece el pago de una multa tiene que haber alguna previsión respecto de cómo y a quién se va a pagar. De lo contrario estaría incompleto el vínculo que se crea.

Es verdad que más adelante el artículo dispone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la ejecución, pero me parece mejor que la reglamentación se ocupe de establecer esta circunstancia. Si el Ministerio de Justicia será el encargado de administrar el fondo y de efectuar los depósitos a que se refiere el inciso b) del artículo 14, considero que en el momento de reglamentar habrá que meditar sobre esta cuestión.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: coincido con lo expresado por el señor diputado preopinante en relación con el artículo 19 y como los montos que se recauden en función de lo establecido por este artículo forman parte de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 14, quisiera que la comisión aclarara a qué gastos administrativos del representante se alude en la norma.

La aclaración es válida toda vez que estamos aprobando la aplicación de multas que van a integrar un fondo y no queda claro qué es lo que financiará dicho fondo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: conviene dejar en claro que estamos discutiendo el título VII, que comprende los artículos 16 a 20. De modo que a los efectos de dar cabida a la propuesta formulada por el señor diputado Polino, solicito la reconsideración de la votación recaída sobre el artículo 14, a fin de

suprimir la frase de esta disposición que determina "y gastos administrativos del representante".

A su vez, en relación con los artículos 18 y 19, la comisión propone otras redacciones, de modo que el primero de ellos diría lo siguiente: "El conciliador dispondrá de un plazo de veinte (20) días hábiles —contados desde la celebración de la audiencia— para cumplir su cometido. Las partes, de común acuerdo, podrán proponer una prórroga de hasta quince (15) días, que el conciliador concederá si estima que la misma es conducente a la solución del conflicto. Tanto la concesión como la denegatoria de la prórroga serán irrecurribles.

"Vencido el plazo sin que se hubiere arribado a una solución del conflicto, se labrará acta y quedará expedita la vía judicial ordinaria."

Con respecto al artículo 19, la redacción que se propone diría: "Dentro de los plazos anteriores, el conciliador podrá convocar a las partes a las audiencias que considere oportunas. Cada incomparecencia injustificada será sancionada con una multa equivalente al cien por ciento (100 %) del valor del arancel que perciba el conciliador por su gestión. La reglamentación establecerá el modo de pago de la multa fijada en esta disposición.

"Con la certificación del conciliador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la ejecución de la multa de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la ley 18.695." Estas son las propuestas que aceptamos.

Además, existe una observación realizada por el señor diputado Caray con respecto al artículo 17, y otra formulada por el señor diputado Novau. Creo que en estas argumentaciones subyace algo que puedo catalogar como un prejuicio anti-dirigente sindical.

La comisión va a mantener la redacción original por cuanto la ley relacionada con los juicios laborales permite la intervención de las representaciones sindicales.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración del artículo 14 formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

Corresponde reconsiderar el artículo 14 con la supresión a la que se ha referido el señor diputado por Buenos Aires.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título VII, que incluye los artículos 16 a 20, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el título VIII, que incluye los artículos 21 a 27.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no estoy conforme con este título, en cuanto establece un trámite de homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; se le permite a este organismo formular observaciones y aun rechazar la homologación.

Este proyecto de ley se ha presentado como un trámite de conciliación previa a todo juicio, y por la forma en que se establece esta institución —que tanto se ha discutido—, estamos en presencia de un conciliador, de un mediador, y de ninguna manera de un juez. Sin embargo, la redacción del artículo 22 le da facultades jurisdiccionales al organismo administrativo, porque dice que otorgará la homologación “cuando entienda que el mismo...” —se refiere al acuerdo— “...implica una justa composición del derecho y de los intereses de las partes...”. Obsérvese que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no sólo se le dan facultades para velar por los intereses del trabajador que pudieran verse afectados, sino que se le da competencia para opinar sobre los intereses de ambas partes. Quiere decir que un empleador o empresa que ha firmado un acuerdo conciliatorio puede tener que llevar a un organismo administrativo la decisión de si este acuerdo puede afectar los intereses de una de las partes, que no necesita de la acción tuitiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Durañona y Vedia. — Se trata de un organismo administrativo que va a ejercer esta homologación; va a opinar sobre los intereses de las partes, va a aprobar o desaprobado esa conciliación; a hacer observaciones, e incluso

va a rechazar lo resuelto si no lo conforma. O sea que se dan funciones jurisdiccionales a un organismo que tiene carácter administrativo. Creo que es muy inconveniente este problema considerado por este título y por lo tanto propongo que el artículo 22 diga: “El acuerdo será homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, quedando suprimido el resto del artículo. También se eliminan los artículos 23, 24 y 25, quedando el artículo 26 para el caso de incumplimiento del acuerdo homologado.

Quiero decir que, según mi propuesta, el título contaría con los artículos 21 y 22, y el 26, así como el 27 con el texto que aparece en el proyecto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: quiero proponer agregados a los artículos 25 y 26, porque consideramos que el procedimiento es muy engorroso, pudiendo llevar más tiempo del que estaba previsto en los plazos estipulados, ya que la norma es muy confusa y está supeditada a la futura reglamentación, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad sobre la forma en que va a quedar redactada.

El agregado que se propone al artículo 25 se justifica en la necesidad de que a partir de un determinado momento las partes queden liberadas y puedan acceder a la Justicia. Entonces se propone como agregado al último párrafo el siguiente: “De igual forma, también quedará expedita la vía judicial ordinaria si transcurridos 60 días desde que el recurrente formalizara el reclamo al que alude el artículo 7º no hubieren las partes alcanzado un acuerdo conciliatorio”.

En el artículo 26 se propone también un agregado, porque aquí hay una situación grave que se daría en caso de incumplimiento y en este aspecto tenemos que ser lo más rígidos posibles para que este tipo de conciliaciones no resulten incumplidas tan fácilmente. Para eso debemos aplicar multas más severas; en ese sentido sugerimos a la comisión el siguiente agregado al último párrafo del artículo: “En este supuesto, el juez, merituando la conducta del empleador, le impondrá una multa a favor del trabajador de hasta el 30 por ciento del monto conciliado”.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Sueiro. — Señor presidente: la comisión no acepta el planteo del señor diputado Durañona y Vedia porque entiende que la homologación

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, condicionada en la forma en que está redactado el artículo 22, garantiza mucho más el derecho de los trabajadores. En ese sentido la actual ley 21.297 en su artículo 15 también prevé un sistema similar para aquellos acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, donde otorga concretamente a la autoridad administrativa la posibilidad de homologar dicho acuerdo, sustentado en resoluciones fundadas que acrediten que mediante tal acto se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes en idéntica forma a como está redactado el actual artículo 22.

Por lo señalado la comisión mantiene la redacción del artículo 22 y, con referencia al planteo del señor diputado Novau, no vamos a aceptar la incorporación que sugiere el artículo 25 porque creemos que es redundante por cuanto la ley ya establece plazos concretos para que se desarrolle la conciliación; pero si vamos a aceptar el agregado al artículo 26 porque creemos que puede mejorar la redacción del proyecto. En definitiva, la comisión mantiene la redacción de los artículos con la salvedad de que en la última parte del artículo 26 se incorpora el texto sugerido por el señor diputado Novau.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gama. — Señor presidente: deseo simplemente que quede constancia de mi voto negativo al artículo 22 por ser inconstitucionales las funciones jurisdiccionales dentro de la administración pública.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar el título VIII, que comprende los artículos 21 a 27, con el agregado aceptado por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el título IX, que comprende los artículos 28 a 32.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — La comisión no tiene propuestas de modificación en este título.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — En consideración el título X, que comprende los artículos 33 a 57.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro. — Señor presidente: en este título proponemos una serie de modificaciones a diversos artículos que pediría fueran leídas por Secretaría.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Por Secretaría se dará lectura a las modificaciones que propone la comisión en el título X.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Las modificaciones son las siguientes:

"Artículo 33: Sustitúyese el artículo 35 de la ley 18.345 por el siguiente: Artículo 35: Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional habilitada legalmente para hacerlo.

"En casos urgentes, se podrá admitir la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero, si dentro del plazo de diez (10) días no fueren presentados o no se ratificara la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que hubiere ocasionado."

En el artículo 35 se sustituye el inciso b) por el siguiente: "b) El traslado de la contestación de demanda y de la reconvencción".

Con respecto al artículo 36, la comisión propone suprimirlo y correr la numeración de los artículos posteriores.

"Artículo 36: Incorpórase como inciso 7º del artículo 65 de la ley 18.345 el siguiente: Inciso 7º: Constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliadora.

"Artículo 40: Sustitúyese el artículo 71 de la ley 18.345, por el siguiente: Artículo 71: Contestación de la demanda. La contestación de la demanda se formulará por escrito y se ajustará, en lo aplicable, a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley y en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La carga prevista en el inciso 1º del artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no regirá respecto de los representantes designados en juicios universales.

"Del responde y de su documentación, se dará traslado al actor quien dentro del tercer día de notificado ofrecerá la prueba de la que intente valerse y reconocerá o desconocerá la autenticidad de la documentación aportada por la demanda.

"Si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto en el artículo 68 será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario.

"En caso de discordancia entre los datos de la persona demandada y los del que contesta la demanda, el juez tendrá por enderezada la acción, salvo oposición expresa de la parte actora. Si el trabajador actuare mediante apoderado se entenderá que el poder es suficiente para continuar la acción contra quien ha contestado la demanda.

"Artículo 42: Sustitúyese el artículo 75 de la ley 18.345 por el siguiente: Artículo 75: Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá deducir reconvención cuando ésta deba sustanciarse por el mismo procedimiento que aquélla, ofreciendo la prueba referida a ella. El actor contestará la reconvención en el plazo de 10 (diez) días y en idéntico término deberá ofrecer la prueba relativa a la demanda y a la contestación de la reconvención.

"Artículo 47: Sustitúyese el inciso b) del artículo 82 de la ley 18.345 por el siguiente: b) Para los documentos agregados en la oportunidad de los artículos 71 y 75, dentro de los tres días de notificada la intimación expresa que formulara el Juzgado junto con el auto de apertura a prueba.

"Artículo 53: Sustitúyese el primer párrafo del artículo 106 de la ley 18.345 por el siguiente: Artículo 106: Inapelabilidad por razón de monto. Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso."

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Se va a votar el título X, que comprende los artículos 33 a 57, ahora 33 a 56.

—Resultado afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban el título XI, que contiene el artículo 58 —ahora 57— y el título XII, que contiene el artículo 59, ahora 58.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— En consideración el título XIII, que contiene el artículo 60, ahora 59.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau.— Señor presidente: propongo que este artículo sea modificado sustancialmente, ya que establece que el procedimiento creado por esta ley entrará en vigencia cuando lo dispongan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia, mediante resolución conjunta.

Sugiero que se respete lo que se estipula para todas las leyes en el sentido de que la entrada en vigencia de la norma se produzca a partir de la publicación en el Boletín Oficial. No podemos modificar este criterio, porque se trata de una redacción normal en lo que atañe a la entrada en vigencia de las leyes.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Sueiro.— Señor presidente: con respecto al artículo 60 —ahora 59— mantenemos la redacción originaria.

Además, proponemos incorporar como artículo 60, el siguiente: "La constancia prevista en el inciso 8º del artículo 65 de la ley 18.345 será exigible cuando se encuentre en funcionamiento el Servicio de Conciliación Laboral previsto en el artículo 4º de la presente ley".

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Se va a votar el título XIII, que incluya el artículo 60, ahora 59, y el nuevo artículo 60 propuesto por la comisión.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— En consideración el título XIV, que comprende el artículo 61.

—Resultado afirmativa.

—El artículo 62 es de forma.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Queda sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado.

Se van a votar las inscripciones solicitadas por los señores diputados Alcides López y Di Tulio.

—Resultado afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— Quedan autorizadas las inscripciones peticionadas.²

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2110.)

² Véase el texto de las inscripciones en el Apéndice. (Página 2116.)

ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, doctor Domingo Cavallo, y del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Armando Caro Figueroa, a efectos de tratar la problemática del empleo en nuestro país, y las políticas afines al mismo tema.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.

ALBERTO R. PIERRE
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.
Secretaría de la C. de DD.

B. ASUNTOS ENTRADOS¹

Proyectos de resolución

De los señores diputados Natale y Antelo: fauna mensual de ganado bovino y porcino en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; pedido de informes al Poder Ejecutivo (2.959-D-95). (*Sobre tablas.*) (T. P. N° 96, página 2.)

—Del señor diputado Matzkin y otros: pedido de

informes verbales a los señores ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social sobre las políticas de empleo (2.986-D-95). (*Sobre tablas.*) (T. P. N° 96, página 2.)

¹ Asuntos cuya entrada en la presente sesión autorizó la Honorable Cámara.

C. INSERCIONES

I

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LOPEZ (A. H.)

Observaciones de los señores diputados López (A. H.), Perasetti, Novau, Nieva, Di Tullio y Carca al proyecto de ley sobre instancia obligatoria de conciliación laboral.

De acuerdo al mensaje del Poder Ejecutivo nacional, la ley que se propone, tiene por objeto crear una instancia de conciliación laboral administrativa obligatoria, previa a toda demanda judicial para dirimir los reclamos individuales y que aligere el candal de litigios en el fuero laboral.

Cuestionamos de inicio los fundamentos del proyecto, que pareciera que tiene por única finalidad disminuir la carga de los Tribunales Laborales, por la vía de trazar el acceso al derecho de justicia que tienen los trabajadores.

Pareciera que obligar a conciliar es la solución coyuntural más fácil, no importan los derechos de los trabajadores, para disminuir la cantidad de juicios, pongamos obstáculos para acceder a los tribunales.

Se dejan sin considerar y proponer soluciones de fondo. No se analizan las verdaderas causas de la litigiosidad en el derecho del trabajo, no se trata de evitar que los trabajadores o empleadores tengan malos conflictos, no se propone perfeccionar los mecanismos internos de la relación laboral, información y consulta, participación, estabilidad, negociación colectiva, etcétera.

Se deja también de lado la consideración del impacto de las políticas económicas en vigencia, sobre las empresas y los trabajadores.

Se pretende aliviar la carga de los juzgados, no buscando mayor eficiencia en la Justicia sino impidiendo que se recorra a la misma.

No se advierte que la mayor litigiosidad se produce mayormente por la falta de técnica legislativa. Se sancionan normas, confusas, contradictorias y que en

la mayoría de los casos para su aplicación resulta necesario la intervención de la Justicia para buscar su interpretación.

La conciliación no debe obedecer a un imperativo de la realidad "desgraciada que vaya contra lo que es justo. Por ello, la transacción obtenida por el ceder a un pleito largo y costoso, incluso para la parte vencedora, adolece de vicios del consentimiento que se presta en esas condiciones" (Cabravellas, Guillermo: *La transacción en el Derecho del Trabajo*, Revista del Derecho del Trabajo, tomo V, 1915, página 539).

Las experiencias nacionales no son buenas en materia de conciliación obligatoria, ni individual ni colectiva, como ejemplo señalo las leyes 11.786 (de conflictos laborales), y 16.936 (de arbitraje obligatorio; Comisión de Conciliación, decreto ley 32.347).

Se pretende solucionar los problemas de los tribunales del Trabajo de la Capital Federal, con una ley de alcance nacional que coloca a los trabajadores del interior en una situación de inferioridad. Lo lógico sería esperar la resolución del tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la organización de su sistema judicial.

Por otra parte, si bien es cierto que el fuero laboral de la Capital Federal se encuentra recargado de expedientes en trámite, no lo es menos que se ha observado una disminución en el ingreso de nuevas demandas, y que aquella recarga más parece obedecer a la duración del trámite de juicios iniciados hace más de un año.

Según estadísticas oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, durante todo 1994 ingresaron un total de 48.832 expedientes, de los cuales 31.310 corresponden a despidos y accidentes. En ese mismo lapso, se resolvieron un total de 53.411 expen-

dantes; 15.917 fueron conciliados y se dictaron 30.089 sentencias definitivas de primera instancia. Aunque las cifras de juicios en trámite al 31-12-94 es alarmante: 111.812, estos datos parecen demostrar que el ingreso y egreso de pleitos se encuentra equilibrado en primera instancia, y permite pensar que la situación debe ir mejorando. En especial, contribuye a ello la instalación de juzgados dedicados exclusivamente al dictado de sentencias y su ejecución, dispuesta por acordada de la Corte Suprema que adoptó así la alternativa propuesta por el diputado Alcides H. López en un proyecto de ley anterior a esa medida.

En el actual procedimiento laboral nacional existe la conciliación obligatoria que se traduce en la audiencia para contestar demanda (artículo 69), desvirtuada por la práctica judicial.

Es más, entre los años 1992 y 1993 en algunos juzgados laborales de la Capital se llevó adelante una experiencia piloto —por sugerencia de uno de los ministros de la Corte Suprema— consistente en agregar a la planta de personal un funcionario, con categoría de prosecretario administrativo, exclusivamente dedicado a tomar intervención en las audiencias previstas en el artículo 68 de la ley 18.345 para incentivar la conciliación y sin perjuicio de su actividad en tal sentido en cualquier otro acto procesal que remiera a las partes en el juzgado. Esa experiencia también resultó un fracaso, toda vez que no se advirtió un aumento de las soluciones conciliatorias pese a dedicar a esa etapa a un funcionario experimentado en la justicia laboral.

En suma, puede afirmarse que las experiencias que en materia de conciliación se han tenido en el fuero laboral de la Capital no han redundado en los resultados esperados. En realidad, parece difícil que una instancia administrativa previa sea idónea para incrementar el número de conciliaciones que se alcanzan en sede judicial que, según la estadística antes mencionada, alcanza a un tercio de los expedientes que se inician, porcentaje éste que no es despreciable y que no podrá aumentarse sustancialmente por la vía que propone el proyecto de ley, aunque se admita que la audiencia de conciliación reglada en la ley 18.345 se ha ido desnaturalizando con el tiempo, convirtiéndose en un mero trámite de contestación de demanda.

Como consecuencia de todo ello, puede afirmarse que la disminución de la litigiosidad no pasa por la instauración de una instancia administrativa previa que, en todo caso, trasladará el litigio fuera de su ámbito natural de desenvolvimiento que es el tribunal de justicia. Y en todo caso, la conciliación en sede judicial estará rodeada de mayores garantías para todas las partes intervinientes, en especial el trabajador.

Insistir en la conciliación obligatoria, no ya judicial sino administrativa, no nos parece la solución adecuada para disminuir la litigiosidad en las relaciones laborales, la cantidad de pleitos o la morosidad judicial; ya que por el carácter esencialmente tutivo del derecho del trabajo, el carácter de orden público de sus disposiciones, la existencia de mínimos inderogables, y las limitaciones a la autonomía de la voluntad, la conciliación y el arbitraje no son institutos que puedan tener una aplicación amplia en las relaciones laborales.

La conciliación siempre implica que las partes efectúan concesiones recíprocas, pero las concesiones no se efectúan en un pie de igualdad. Impuesta puede servir para aumentar las desigualdades sociales y deteriorar la imagen de la Justicia.

El trabajador constituye la parte débil de la relación laboral, depende del mantenimiento del trabajo para subsistir, está siempre en una inferior situación técnica y jurídica, y concurre a cualquier audiencia condicionado por su estado de necesidad.

El reconocimiento de esa situación de desigualdad del trabajador es lo que origina el derecho del trabajo y el carácter de orden público de su normativa, así como la existencia de mínimos inderogables, la nulidad de renunciaciones, por lo que la conciliación laboral es y debe ser distinta a la civil, etcétera.

Al establecer una instancia conciliatoria obligatoria y administrativa se está colocando al trabajador en una situación de supuesta igualdad ante el empleador, que de hecho no la tiene.

Resulta así que la conciliación o mediación como solución alternativa de conflictos, pueden ser institutos válidos para asuntos de derecho comercial, familiar, etcétera, no lo son en materia laboral, por la existencia de mínimos inderogables derivados de la situación de desigualdad de las partes.

La posibilidad de homologación de los acuerdos de partes siempre estará limitada por los principios inderogables de los artículos 12, 13, 15 y siguientes de la LCT.

Por eso además de criticar la utilidad del instituto, nos oponemos al carácter obligatorio que se da a la conciliación. El éxito de cualquier solución privada de un conflicto depende de la predisposición de las partes, de la voluntad y no de la imposición.

El proyecto debería ser modificado en este aspecto o por lo menos, posibilitar como lo hace el proyecto de mediación obligatoria en el procedimiento civil, el derecho de las partes de abandonar la etapa conciliatoria después de la primera audiencia y recurrir a la Justicia.

En el proyecto se encomienda la tarea de conciliación laboral obligatoria al Ministerio de Trabajo de la Nación, organismo en franca decadencia, ya que no sólo carece de una infraestructura adecuada, sino de eficiencia, para cumplir con las funciones que actualmente tiene, como por ejemplo, las de policía de trabajo.

Estamos legislando para la Nación en función de los problemas que tienen los juzgados nacionales del Trabajo de la Capital Federal, y no pensando también en el interior, donde el Ministerio de Trabajo cada vez tiene menos infraestructura y personal, y no podrá llevar adelante las nuevas funciones.

Se crea un Registro Nacional de Conciliadores Laborales dependiente del Ministerio de Justicia. Entendemos que deben utilizarse las disposiciones referidas a la organización del registro como a las condiciones para designarse como conciliador con las aprobadas para el régimen de mediación civil.

La conciliación obligatoria no puede comprender aspectos de la relación laboral vinculadas al orden público. Por eso, aun en la conciliación judicial que establece el artículo 69 de la ley 18.345 vigente se dice:

“Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos por el empleador no podrá proponerse a las partes soluciones transaccionales”.

Si el empleador reconoce que debe salarios no puede aceptarse que por vía de la conciliación se le pague menos de lo que por ley le corresponde.

Por eso tanto el arbitraje como la conciliación debería limitarse sólo a algunos aspectos derivados de la relación laboral. En este sentido el maestro Antonio Vázquez Vidar en un trabajo publicado en la Revista del Derecho del Trabajo XLVII-A, página 125 y subsiguientes con el título de: Posibilidad de que determinadas cuestiones vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho de trabajo sean resueltos por árbitros, etcétera ... sostenía que sólo son posibles de detraerse del conocimiento de los jueces asuntos vinculados con:

a) Suspensiones de carácter disciplinario o económico que no superen determinado número de días.

b) Cuestiones referidas a la ubicación del trabajador en determinada categoría profesional establecidas en el convenio colectivo;

c) Conflictos vinculados al ejercicio del *ius variandi*;

d) Cuestiones de carácter colectivo. Interpretación cláusulas del convenio, etcétera.

Los otros conflictos no pueden estar sustraídos de la resolución de los jueces.

En cuanto al proceso de conciliación se establece un plazo de 30 días corridos, con una prórroga de común acuerdo de 30 días más. Vencido el plazo si no hay acuerdo queda expedita la vía judicial.

Debe posibilitarse a las partes el derecho a dejar sin efecto en proceso de conciliación, luego de la primera audiencia, al igual que en el proceso de mediación civil. Lo contrario sería colocar al trabajador en peor situación que cualquier litigante en el fuero civil y/o comercial.

El régimen de financiamiento nos parece inadecuado e insuficiente y al establecer honorarios del conciliador a cargo del empleador se facilita que el mismo apure el arreglo al margen de la justa composición de intereses por el apuro en cobrar esos honorarios.

En lo referente al título X, “Modificaciones a la ley 18.345”, que es la ley de procedimientos ante la justicia nacional del trabajo, se produce una reforma sustancial, sin la debida discusión y debate de todos los sectores interesados.

Se cambia lo central del proceso, ya que se elimina la audiencia del artículo 69 que es una audiencia obligatoria donde el juez debe buscar la conciliación y si no se produce el demandado debía contestar la demanda y ofrecer la prueba.

Junto con la demanda el trabajador debe ofrecer toda la prueba, que le da ventaja al empleador quien la debe contestar en 10 días.

Las reformas al resto del articulado reconocen algunos antecedentes legislativos pero no priva del vicio de ser un mero parche, que no soluciona los problemas verdaderos de la justicia laboral.

No advertimos la necesidad de la reforma que se propone en el artículo 33 del proyecto al artículo 35 de la ley 18.345, dado que la norma actual con la redacción de la ley 20.196 es igual al propuesto.

Por otro lado, la implantación de un procedimiento administrativo previo de conciliación de sometimiento obligatorio no se compatibiliza con el derecho consagrado en el artículo 89 del Pacto de San José de Costa Rica a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente para la determinación, entre otras, de obligaciones de carácter laboral.

La incorporación de ese pacto a la Constitución Nacional, implica que cualquier sistema que impida el acceso directo a la justicia para ventilar litigios entre particulares, o lo dificulte u obligadamente dilate en el tiempo, resulta inconstitucional.

El apuro en cumplir con las imposiciones del Poder Ejecutivo, hace que la Cámara esté dando sanción a un proyecto inadecuado, sin la debida discusión y con graves errores de concepto y técnica legislativa.

Lo lógico y razonable hubiera sido una sola ley de mediación con un título especial dedicado a la parte laboral.

Esto justifica las observaciones que dejamos formuladas y la disidencia total en el despacho de la comisión, donde no fue posible plantear corrección alguna en el proyecto.

ANÁLISIS EN PARTICULAR

Artículo 1º — Establécese que los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial ante un organismo administrativo, etcétera.

¿Cuáles son los conflictos de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo?

La competencia por la materia está definida en el artículo 20 y la competencia especial por el 21 de la ley 18.345.

Se incluye:

a) Conflictos individuales de derecho, cualquiera sean las partes. Incluso la Nación, sus reparticiones antiguas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Demandas y convenciones fundadas en contrato de trabajo, convenciones colectivas, laudos con cláusula de convenciones o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.

c) Las causas que solo persiguen la declaración de un derecho, en los términos del artículo 322, 1er. párrafo del CPC.

El artículo 21 incluye:

a) Causa en las que tenga influencia decisiva la determinación de cuestiones directamente vinculadas con aspectos individuales o colectivos del derecho del trabajo.

b) Las demandas por desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos concedidos a los trabajadores en virtud de contratos de trabajo.

c) Demandas por tercerías.

d) Las causas que versen sobre el gobierno y la administración de asociaciones profesionales y las que se susciten entre ellas y sus asociados.

e) La ejecución de créditos laborales.

f) Los juicios por cobro de aportes, contribuciones y multas.

g) Los recursos que se atribuyan a los jueces nacionales o a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el despacho de la Comisión no se indica ninguna excepción por lo que todos estos procesos deben entrar en la conciliación obligatoria, lo que constituye un absurdo.

Debe existir una limitación. Las causas por ejemplo que versen sobre gobierno y administración de asociaciones profesionales o conflictos entre estas y sus afiliados no pueden ser llevadas a conciliación obligatoria previa, lo mismo que las de los incisos e), f) y g) del artículo 21 ni las demandas de tercerías o las acciones meramente declarativas.

Tampoco puede ser sometido a conciliación las causas en que el Estado nacional, provincial, municipal o sus entidades sean partes.

Así como los artículos 2º y 3º de la mediación civil prevén excepciones deben establecerse las pertinentes en el proceso laboral.

TITULO II

Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria

Sugerimos adoptar para los artículos 5º y 6º la redacción propuesta para los artículos 15, 16 y 17 de la mediación civil/comercial que responden a una mejor técnica legislativa sustituyendo los términos "registro de mediadores" por "Registro Nacional de Conciliadores Laborales" y "conciliadores" en lugar de mediadores.

Asimismo, el sistema bicéfalo creado por la ley, estableciendo por una lado el Registro de Conciliadores Laborales en la órbita del Ministerio de Justicia y el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo es inconveniente. En todo caso, debería unificarse el manejo de la cuestión en este último, especializado.

TITULO III

Demanda de conciliación

Objetamos la denominación del título, no existe una "demanda de conciliación", lo que existe es un mero reclamo, que se somete a un procedimiento especial. Proponemos "del reclamo administrativo".

Objetamos la inclusión de la frase "o representante sindical". El reclamo sólo lo puede efectuar el trabajador directamente o por medio de apoderado. El representante sindical también debe tener poder, no es un tercero distinto al apoderado. Como en toda representación judicial o administrativa deben aplicarse las reglas del mandato, sin perjuicio de las actuaciones que en conjunto con el trabajador pueda hacer la representación gremial.

No aparece previsto la notificación previa al empleador, previa a la designación del conciliador o apertura del procedimiento de conciliación.

Pregunta: ¿Si es un reclamo administrativo antes de designar el conciliador no correspondería correr traslado del reclamo al empleador para que conteste y quede trabado el conflicto?

Si ante el reclamo hay allanamiento, ¿qué sentido tiene el proceso de mediación?

El texto del actual artículo 68 de la ley ha sido criticado por la inadecuada ubicación dada al trámite de conciliación, ya que coloca al trabajador en situación de inferioridad con respecto al empleador desde el momento que éste conoce la posición de aquél y no ha dado a conocer la suya. Ambas partes deben conocer sus posiciones para recién poder convenir. (Sagues, Néstor, *Oportunidad procesal y obligatoriedad del acto de conciliación.*)

La misma crítica podría hacerse al procedimiento administrativo que se intenta en el proyecto. Debe haber traslado previo al empleador y contestación, para que exista conflicto y posibilidad de conciliar.

Tampoco es aceptable que la demanda deba hacerse en un formulario y en forma sintética. Precisamente la labor del conciliador se verá facilitada en cuanto más elementos de juicio tenga en su poder.

TITULO IV

Designación del conciliador

Se propone sustituir los artículos 9º, 10 y 11 por la redacción acordada al artículo 18 de la mediación civil, cambiando los términos mediador por conciliador.

TITULO V

Retribución del conciliador

Nos parece más adecuado al proceso laboral la redacción acordada para los artículos 21 y 22 de la mediación civil. Con la aclaración que el pago deberá ser asumido por el empleador.

En cuanto al artículo 13, la inclusión del reintegro al fondo del honorario del conciliador en la condena en costas al empleador en sede judicial se presenta como una coacción a la conciliación, al igual que la posibilidad de su recargo por el juez.

El empleador puede tener razones justificadas para negarse a conciliar, y no de carácter exclusivamente económico. En todo caso la especulación de los empleadores para demorar los juicios y con ello el pago de las sumas debidas a los trabajadores puede eliminarse con la aplicación de tasas de interés más altas. Actualmente el 12 % anual que impone la Cámara del Trabajo resulta demasiado baja y alienta aquella clase de especulaciones.

TITULO VI

Fondo de financiamiento

No se precisa como se solventarán los gastos que demande el funcionamiento del Servicio Nacional de Conciliación que funcionará en la órbita del Ministe-

rio de Trabajo, cuando es de suponer válidamente que su desenvolvimiento administrativo exigirá recursos para afrontar otros gastos además de los honorarios del conciliador.

No se sabe a qué se refiere la ley con "gastos administrativos del representante" que pone a cargo del fondo del financiamiento. ¿Son los gastos administrativos del conciliador?, ¿o los del Servicio de Conciliación? En el primer caso, ¿cómo y quién establecerá dichos gastos?

Tampoco está claro a qué se refiere el inciso b). En especial teniendo en cuenta que el fondo se integra también con partidas que se asignen en el presupuesto nacional [inciso c)].

El artículo 15 pone de manifiesto la inconveniencia de una conducción dividida del sistema entre dos carteras, y que el fondo de financiamiento esté destinado exclusivamente a abonar honorarios del conciliador y los llamados "gastos del representante" (?). Aquel fondo debería destinarse a solventar todos los gastos del sistema, unificado en el Ministerio de Trabajo.

TITULO VII

Procedimiento de conciliación

Objetamos el carácter administrativo del procedimiento que coloca al trabajador en desventaja con relación a los reclamos de naturaleza civil que prevé un procedimiento judicial.

Objetamos también el carácter obligatorio del procedimiento. La conciliación debe ser voluntaria para que sea exitosa.

No prevé la obligación de la asistencia personal de las partes a la primera audiencia. Son las partes directas y no los letrados los que pueden valorar o no la posibilidad de la conciliación.

No se prevé la posibilidad de que las partes luego de la primera audiencia puedan abandonar el proceso de mediación y tener expedita la vía judicial, como lo hace el proceso de mediación civil.

Objetamos la representación alternativa de las partes por un letrado o por las asociaciones gremiales o las representativas de los empleadores según sea el caso.

La norma deberá exigir en todos los casos el patrocinio letrado para las partes intervinientes. Eventualmente puede admitirse también la intervención de las asociaciones pero no excluyendo a la asistencia letrada. El carácter y finalidad de una y otra representación son obviamente diferentes, y la corporativa no puede excluir la letrada que constituye una asistencia técnica indispensable para garantizar los derechos de las partes en conflicto.

Nos parece innecesario, además, la admisión y existencia del pacto de cuota litis en procedimientos de esta naturaleza.

TITULO VIII

Acuerdos conciliatorios

Mientras que el proceso civil y comercial se requiere homologación judicial del acuerdo conciliatorio en lo laboral solamente administrativa.

No observamos adecuada capacidad técnica y administrativa en el Ministerio de Trabajo y las delegaciones del interior para efectuar una valoración jurídica y de hecho para determinar si existe justa composición de derechos en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

No prevé la ley qué pasa en el caso de que no exista homologación del acuerdo por el Ministerio y alguna de las partes objete esa resolución administrativa. ¿Queda expedita la vía judicial? ¿Qué pasa con el trámite administrativo objeto de un recurso?

Existen antecedentes provinciales sobre conciliación administrativa obligatoria previa a la demanda, pero limitada a conflictos referidos controversias disciplinarias, que fueron aceptados como constitucionalmente válidos porque se prevé la revisión judicial de los acuerdos. (Ley 10.149, Buenos Aires.)

Podrá argumentarse que actualmente el Ministerio de Trabajo homologa acuerdos en los términos y con los alcances previstos en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el procedimiento conciliatorio que hoy se lleva a cabo en ese Ministerio no es obligatorio para las partes, se promueve a instancia de una de ellas y cualquiera puede declinar la jurisdicción cuando lo estime conveniente.

TITULO IX

Arbitraje voluntario

Objetamos totalmente este título. Nos parece innecesario insistir en arbitraje cuando fracasó la conciliación. El procedimiento de arbitraje debe ser judicial conforme lo establece la sección 7 de la ley 18.345.

No puede someterse a árbitros las cuestiones en donde están en juego derechos indisponibles del trabajador.

Aún con la vigencia del arbitraje de la actual ley, nunca se registró un caso.

TITULO X

Modificaciones a la ley 18.345

Artículo 33: La modificación que se propone no tiene sentido ya que la redacción actual del artículo 33, primer párrafo de la ley es idéntico que el que se propone.

En lo atinente a las demás modificaciones propuestas se discute en general con ellas, toda vez que —a su vez— se comparan en su mayor parte con las propuestas contenidas en el proyecto de ley de modificación a la ley 18.345 de los diputados Alcides H. López y Juan O. Gama (expediente 3.443-D-93), aunque es obvio que no fue tenido en cuenta para elaborar el que examinamos, sino que se ha limitado el punto a reproducir uno anterior de los diputados Borda y Carpellieri.

Por tal razón, sin perjuicio de la concordancia apuntada se señala lo siguiente:

a) El traslado de la contestación de la demanda que se prevé en el nuevo artículo 68 de la ley 18.345 (artículo 38 del proyecto) debería notificarse por cédula, previéndose expresamente, incorporando para ello a

dicho traslado entre las providencias que se mencionan en el artículo 48 de la ley 18.345 (artículo 35 del proyecto).

b) Se insiste en la conveniencia de modificar el artículo 84 de la ley 18.345 (artículo 49 del proyecto) tal como se plantea en el proyecto de los diputados López y Gauna. Ello es así porque habiendo optado por tramitar la prueba informativa tal como en el procedimiento civil basta —como se hace en ese proyecto— con remitirse a las normas pertinentes del Código Procesal Civil y Comercial, y además se establece un plazo para acreditar el diligenciamiento bajo pena de caducidad, como medida para impedir que a través de esta prueba se dilate el trámite de las actuaciones.

c) No es conveniente abrir la posibilidad de prescindir de prueba informativa en primera instancia que luego pueda agregarse y torcer el resultado en segunda (artículo 52 del proyecto, nuevo texto del artículo 94 de la ley 18.345). Tradicionalmente el procedimiento laboral ha vedado la incorporación de prueba en Cámara —salvo casos muy excepcionales— con el propósito de hacer un procedimiento más ágil, y no se advierte la razón para modificar tal criterio. Además la prescindencia de prueba por el juez de primera instancia mediante resolución expresa sobre su innecesidad debería equipararse (como lo ha sido hasta ahora) a

denegatoria de medida de prueba, resultando recurrible por el trámite general de apelación de providencias simples y sentencias interlocutorias previsto en la ley 18.345.

c) Como se propone en el proyecto de los diputados López y Gauna, el monto de la inapelabilidad debe incrementarse a 200 veces el valor del derecho fijo previsto en el artículo 51 de la ley 23.187 (actualmente de \$ 4,00). El proyecto en examen lo fija en 150 (artículo 54).

d) Se insiste también en la modificación de los artículos 116 y 132 como se propició en su oportunidad. Por un lado, se establece el depósito del capital de sentencia —que puede sustituirse por bienes a embargo— cuando el condenado y apelante sea el empleador. Por el otro, se dispone que el traslado de la liquidación lleve también expresamente la intimación de pago en caso de no merecer aquella observación, receptándose una práctica habitual en tal sentido, imputada por creación de los jueces.

Art. 58: *Incentivos*. Proponemos su eliminación. Resulta absurdo incentivar las empresas que tienen conflictos por el solo hecho de conciliar los litigios, sin analizar el origen de los mismos y las conductas de las partes.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DI TULLIO

Nota dirigida al señor diputado por trabajadores de la industria del procesamiento del pescado

Al compañero diputado nacional don Héctor Di Tullio.
Capital Federal.

S/D.

Caleta Olivia, 18 de julio de 1995.

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes obreros y empleados de la industria del procesamiento de pescado (alimentación), nos dirigimos a usted con el fin de poner en su conocimiento, la crítica y terrible situación en la que se encuentran más de 30 compañeros y compañeras empleados de la empresa Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. con domicilio real sito en calle avenida Mitre y Antártida Argentina de Caleta Olivia, Santa Cruz, afectados por una maniobra de fraude laboral que viola numerosas disposiciones del derecho del trabajo y que nos coloca en un cuadro de desempleo y marginación que se agrava día tras día.

Los hechos

Los suscritos y numerosos compañeros de trabajo, somos oriundos del norte del país, en especial de la provincia de Buenos Aires (Mar del Plata), provincia

del Chubut (Trelew, Rawson y Comodoro). Hacia mediados de 1993 fuimos contactados en nuestras ciudades de origen por un grupo de personas que decían ser representantes de unas supuestas "cooperativas de trabajo" que necesitaban mano de obra especializada en tareas de cortes de pescado en plantas de tierra, a los fines de trabajar en empresas radicadas en el Sur argentino.

Se nos prometió trabajo bien remunerado, continuidad, alojamiento a precios razonables y demás beneficios laborales conforme a la legislación vigente.

De esa manera nos conchabamos con una supuesta cooperativa de trabajo denominada Mar del Sur con domicilio en Comodoro Rivadavia-Chubut, que daba su prestación a la empresa pesquera Antonio Barillari S.A.C.I.F. y A. radicada en Caleta Olivia.

Apenas llegados nos encontramos con que la realidad prometida era bien distinta.

Se nos empezó a pagar \$ 0,18 por kilogramo de pescado fileteado, razón por la cual para tener mínimo sueldo digno de \$ 300 por quincena debíamos filetear aproximadamente unos doscientos cincuenta kilogramos de pescado, labor que demanda aproximadamente 10 a 12 horas diarias ininterrumpidas de labor. Cabe destacar que el trabajo de fileteado se realiza en ambientes fríos y húmedos, con todos los riesgos propios de la actividad (cortes con cuchillos, infecciones, etcétera).